

Señor
José Miguel Durana Semir
Senador Región XV
Presente.

Ref.: Imprescriptibilidad de la acción para perseguir delitos sexuales contra menores de edad.

Estimado Senador:

Adjunto a la presente, proyecto de intervención para su discusión en Sala del proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

PROYECTO DE INTERVENCION: IMPRESCRIPTIBILIDAD DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES DE EDAD.

A momento de discutir, en general, el proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de la acción para investigar y sancionar los delitos sexuales contra menores de edad, manifesté que la aprobación de esta norma, nos hacía ser un mejor país, dando esperanza a las víctimas y luchando eficazmente contra la impunidad de los agresores.

Este bien mayor que es la seguridad jurídica de nuestros niños, niñas y adolescentes, motiva que hoy aprobemos, en su instancia en particular, una norma de política criminal que es absolutamente indispensable para la protección de sus destinatarios: las víctimas, hoy menores de edad.

De la revisión de las modificaciones, introducidas en la fase de indicaciones, se puede evidenciar que el proyecto de ley ha sido perfeccionado y hoy podemos aprobar un texto que responde a los objetivos originalmente planteados.

De esta forma, se elimina del ámbito del proyecto al delito de **“secuestro con violación”**, dado que sí se encuentra contemplado el delito de **“sustracción de menores con violación”**; Los delitos asociados a la **comercialización y almacenamiento de pornografía infantil**, puesto que se los considera delitos que tienen efectos y carácter permanente y finalmente, se deja al margen e esta norma al **delito de violación con homicidio**, dado el deceso del menor de edad que ha sido víctima de este tipo de delitos.

Si bien las primeras dos exclusiones son perfectamente atendibles, me hubiese gustado que, en el caso del delito de violación con homicidio, la acción pudiese ser ejercida, **en cualquier tiempo. por la familia del menor de edad que pierde la vida en un delito de violación con homicidio**, lo cual podrá ser incorporado en un proyecto futuro.

Por otra parte, se deroga el artículo 369 quater, dado que, a partir de la vigencia de esta ley, las acciones penales, para este tipo de delitos, se consideran imprescriptibles y pasa a ser ineficaz la suspensión del plazo para el ejercicio de la acción, esperándose que la víctima cumpla la mayoría de edad. De esta forma, el agresor podrá tener la plena certeza que no se podrá amparar en el tiempo y que su delito será, una vez iniciada la acción penal por la víctima, en cualquier tiempo, irremediabilmente castigado.

Asimismo, se establece que, una vez cumplida la mayoría de edad, estos delitos sean considerados de acción penal pública, previa instancia particular, no pudiendo procederse de oficio por el Ministerio Público, respetándose en todo momento, la autonomía y potestad de la víctima para decidir cuando iniciar la acción penal.

Un elemento que acompaña a la plena reparación de la víctima de este tipo de delitos, lo constituye su reparación civil y resultando evidente que al no haberse ejercido la acción penal no podría entenderse prescrita la acción civil se ha optado por el adecuado criterio de establecer la figura de la renovación de la acción civil reparatoria, con lo cual, una vez decidida y ejercida la persecución penal podrá ejercerse la acción civil, sin temor a que la misma se encuentre prescrita.

Quizás uno de los mayores cuestionamientos a este proyecto de ley ha sido dado por algún criterio interpretativo de establecer la retroactividad de la imprescriptibilidad de la acción penal. Situación compleja porque, por una parte, conlleva la alteración de nuestro orden constitucional y por otra, deja fuera del ámbito de esta ley a las víctimas que siendo hoy menores de edad han sufrido este tipo de delitos.

El proyecto opta por no alterar el principio constitucional de la irretroactividad de la ley penal mas gravosa, lo cual constituye una de las bases

de nuestro ordenamiento penal y mantiene para los que hasta la fecha de promulgación de esta ley, han sufrido este tipo de delitos la suspensión de la acción hasta que cumplan la mayoría de edad. La opción adoptada por el proyecto, busca mantener un doloroso equilibrio, entre el objeto de la ley y el principio constitucional citado.

Sugerencia: Se sugiere la aprobación a este proyecto de ley en su votación en particular.

Es cuanto someto a su consideración para fines consiguientes,

César Quiroga Soria
Asesor Legislativo Externo

Señor
José Miguel Durana Semir
Senador Región XV
Presente.

Ref.: Proyecto de ley, erradicación de violencia contra la mujer.

Estimado Senador:

Adjunto a la presente, proyecto de intervención para su discusión en Sala del proyecto de ley que busca la erradicación de la violencia contra la mujer, lo cual es especialmente sensible para la Región de Arica y Parinacota dado el reciente feminicidio que afectó a una ciudadana ariqueña.

PROYECTO DE INTERVENCION: PROYECTO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El proyecto de ley, se enmarca en una decisión de política criminal, en orden a erradicar de nuestra sociedad toda forma de violencia contra la mujer.

En el mes de Abril del presente año, los ariqueños fuimos testigos del horrendo feminicidio de Joice Tello Aviles, mujer ariqueña, apuñalada cobardemente por su ex pareja en plena vía pública.

Cito el caso de nuestra Joice Tello Avilés para graficar la necesidad de aprobación de esta norma para que nuestro sistema normativo cuente con una herramienta eficaz para prevenir y generar una cultura ciudadana de respeto a los derechos fundamentales de las mujeres. Principalmente su derecho a la vida y a su integridad física y psíquica, libre de toda forma de violencia.

La definición de violencia contra la mujer dada por el proyecto de ley, la protege no sólo en el ámbito público sino que principalmente en el ámbito privado donde, por diversas circunstancias, se dan, con mayor frecuencia, las situaciones de violencia que quedan en la impunidad.

Es necesario, asumir como legisladores nuestra responsabilidad y generar con la mayor celeridad posible, un ámbito normativo que no sólo castigue conductas que merecen unánime repudio social sino que sean oportunas y eficaces para prevenir la violencia, bajo una cultura de respeto y construcción de dignidad.

Es por ello que la norma propuesta establece el deber de EDUCAR en el respeto a la igualdad y no discriminación desde una “perspectiva de género”.

En este mismo sentido, la norma obliga a la identificación de situaciones de vulnerabilidad en la cual se puedan encontrar las mujeres y determina que diversas entidades del Estado se coordinen para proveer un ámbito de protección que permita enfrentar situaciones riesgosas. En especial, para mujeres que han sido víctimas de violencia anterior.

Si Joice Tello Avilés hubiese contado con un sistema eficaz de protección, en consideración a los hechos de violencia de la cual ya había sido víctima, hoy continuaría con su vida normal en nuestra comunidad.

Dentro de los objetivos que debemos perseguir con la nueva ley, es necesario prevenir aquellas situaciones que provocan una doble victimización y para ello se regulan situaciones tan básicas como es el hecho de que la mujer que retira sus efectos personales del lugar donde sufre violencia, sea acompañada, en todo momento por Carabineros de Chile. Asimismo, cualquier medida cautelar que decreten los Jueces de Familia será inmediatamente comunicada a Carabineros, cuando se requiera su participación.

De la misma forma, le proyecto se hace cargo de no dejar en el olvido denuncias que muchas veces, como efecto del temor de las mujeres víctimas, no continúan su tramitación en los tribunales de justicia, de esta forma, se determina que esas causas que no continúan por no comparecencia de las partes queden archivadas, sólo provisionalmente, pudiendo el denunciante o demandante solicitar, en cualquier momento la continuidad del proceso.

Estos y otros aspectos de esta norma constituyen innegables avances.

Me encantaría que hoy, la familia de Joyce Tello Avilés, sus amigos y toda nuestra comunidad no la hubiese perdido a manos de su agresor. Pero, desde este lugar, los invito a aprobar esta norma y contribuir a que su memoria nos sirva para construir una cultura de derechos para nuestras mujeres.

Sugerencia: Voto favorablemente este proyecto de ley.

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención,

César Quiroga Soria

Señor
José Miguel Durana Semir
Senador Región XV
Presente.

Ref.: Sanción administrativa contra alcaldes.

Estimado Senador:

Adjunto a la presente, proyecto de intervención para su discusión en Sala de la ley que busca agilizar la aplicación de sanciones administrativas en contra de alcaldes.

PUNTO 1 DE LA TABLA 18 de JUNIO DE 2019.

PROYECTO DE INTERVENCION: AGILIZACION SANCIONES ADMINISTRATIVAS A ALCALDES MUNICIPALES.

Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público y cuentan con el reconocimiento constitucional de su personalidad jurídica y patrimonio propio. Así se establece en el artículo 18 de nuestra carta fundamental.

El control de su gestión y funcionamiento, esencial para el desenvolvimiento de la comunidad queda entregado, en el ámbito interno a sus propias unidades de control y como entidad a la Contraloría General de la República.

Para este efecto, se establece, expresamente que se entiende como "*notable abandono de deberes*" el hecho de que la elaboración y modificación del presupuesto municipal considere una proyección de ingresos y gastos para la municipalidad que, por negligencia, genere un desequilibrio financiero y para ello se considera la mora en el pago de gastos corrientes, de proveedores, de servicios básicos, sobreestimación de ingresos, retardo en el presupuesto o en

la modificación presupuestarias, ampliándose esta responsabilidad al Concejo Municipal.

En nuestro actual sistema legislativo, la Contraloría General, cuando determina que el Alcalde municipal tiene responsabilidad administrativa remite antecedentes al Concejo municipal.

De esta forma, cuando un Alcalde incurre en Notable abandono de deberes, los concejales, que compongan a lo menos un tercio de los que se encuentren en ejercicio, pueden requerir al Tribunal Electoral Regional la cesación en el cargo del Alcalde.

El proyecto de ley, persigue facultar a la Contraloría General de la República para que cuando se determine la responsabilidad administrativa del Alcalde, aplique, directamente, las sanciones de “multa, censura y suspensión del empleo” por un periodo de 30 días a 3 meses.

Esta nueva sanción directa, interpuesta por la Contraloría General de la República será, en el marco del proyecto, apelable ante la I. Corte de Apelaciones respectiva, quien deberá resolver, previo informe de la propia Contraloría, sin recurso ulterior.

En el caso de grave falta a la probidad administrativa o exista abandono de deberes, la Contraloría remitirá su propuesta de remoción al Concejo Municipal y en caso de que este Concejo no se pronuncie, poner estos antecedentes en conocimiento del Tribunal Electoral Regional.

En este sentido, la imposición de sanciones de suspensión, en forma directa por la Contraloría General de la República, sin pasar por el Concejo Municipal o la remisión de antecedentes, a los efectos de suspensión ante el TER, sin necesidad de la intervención del Concejo Municipal constituye una alteración del principio de la autonomía municipal, constitucionalmente consagrado.

Es por ello que, no obstante la oportunidad de mejorar las facultades de la Contraloría General de la República, no debemos otorgar facultades que

implique la transgresión de la autonomía de los cuerpos intermedios y estos aspectos deben ser modificados en la etapa de indicaciones.

Sugerencia: Aprobar en general dejando constancia de la necesidad de mejorar el proyecto en la fase de indicaciones.

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención,

César Quiroga Soria

Asesor Legislativo Externo

Sr.

José Miguel Durana Semir

Senador Región XV

Presente

REF.: Proyecto de ley revisión periódica de internación de menores.

Estimado Senador:

A los efectos de su discusión en Sala, propongo a Ud. el siguiente proyecto de intervención:

PROYECTO DE INTERVENCION: Internación de menores

El proyecto de ley, busca ejercer un mayor control y vigilancia sobre las condiciones en las cuales se encuentran los menores de edad que son internados en establecimientos de protección, lo cual, siempre será positivo, dado que, de la forma propuesta, es el Juez el que podrá requerir detalles y explicaciones de las condiciones del niño, niña o adolescente sujeto a estas medidas de protección y no basará con informes semestrales.

La inmediatez, propia de la Audiencia entre el Juez y el Director de la residencia o representante legal propuesta, constituye un avance en la protección de estos menores, puesto que evita la dilación de solicitar aclaración de informes y la distorsión que en estos se producen. Sin perjuicio del olvido en el que terminan muchos de ellos.

Es importante, como lo sugiere el proyecto, que los intervalos en la realización de estas audiencias sean acortados a tres meses, en relación a los informes semestrales, de forma que el Juez tenga un mayor control sobre la situación de estos niños vulnerables.

Sin embargo, será necesario que el Poder Judicial adopte las medidas pertinentes para enfrentar la sobre carga de trabajo que estas audiencias conlleven, de forma tal de garantizar la efectiva realización de las audiencias antes mencionadas.

La posibilidad de que el menor comparezca a la Audiencia trimestral

realizada ante el Juez, constituye un avance en el sentido que podrá exponer su visión de cualquier situación que enfrente.

Sin embargo, me parece necesario que la presencia del menor no sea facultativa, sino obligatoria, puesto que es importante que el Juez pondere, en todo momento la situación del menor.

De la misma forma, debe considerarse la presencia de los profesionales a cargo de la supervisión dicho menor, a los efectos de recabar informes integrales que den mayor certeza de su situación.

En la Región de Arica y Parinacota, durante el trimestre Abril, Mayo y Junio de este año. Un total de 765 menores fueron ingresados a Áreas de Protección, 2342 menores fueron atendidos y 723 menores egresaron de las mismas.

Una herramienta eficaz para que estas cifras no sean sólo números estadísticos es la determinación, en la forma más integral posible, de la situación de cada uno de los niños, niñas y adolescentes involucrados y en ese sentido, la comparecencia ante el Juez y el análisis de cada situación particular, constituye un significativo avance.

Sugerencia: Es por ello que manifiesto mi voto favorable a este proyecto de ley.

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención,

César Quiroga Soria
Asesor Legislativo Externo

Señor
José Miguel Durana Semir
Senador Región XV
Presente.

Ref.: Proyecto de Ley pronto pago.

Estimado Senador:

Adjunto a la presente, proyecto de intervención para su discusión en Sala del proyecto de ley que corrige la situación producida con la publicación del proyecto de ley de pago a 30 días, preparado en base a la propuesta dada por la Secretaría de la Comisión de Economía.

**PROYECTO DE INTERVENCION (EN BASE A LA RESEÑA PREPARADA
POR LA SECRETARIA DE LA COMISION DE ECONOMIA): CORRECCION
PROYECTO DE LEY PAGO A 30 DIAS.**

Señor Presidente,

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Economía, me corresponde referirme al informe de la Comisión recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que permite a las empresas de menor tamaño demandar indemnización cuando sean perjudicadas por el acto de competencia desleal que indica. BOLETÍN N° 12.646-03.

El único objetivo del proyecto es reponer el inciso segundo de la letra i) del artículo 4° de la ley N° 20.169, sobre competencia desleal, relativo a los derechos de la empresa de menor tamaño afectada por la conducta desleal que se indica.

En efecto, durante la tramitación de la ley N° 21.131, que establece el pago a 30 días, se debatió latamente modificar un aspecto muy específico del artículo 4° de la ley N° 20.169, sobre competencia desleal, que consagra una nómina de actos que serán

considerados actos de competencia desleal, en una enumeración que no tiene el carácter de taxativa.

Fue así como la discusión se centró únicamente en precisar la conducta contenida en la letra i), según la cual se considerarán actos de competencia desleal, de acuerdo a la nueva redacción, los siguientes:

"El establecimiento o aplicación de cláusulas contractuales o conductas abusivas en desmedro de los proveedores, el incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos con ellos o de los plazos dispuestos en la ley N° 19.983 para el cumplimiento de la obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura."

Esta conducta ilícita estaba acompañada, desde su incorporación a la ley sobre competencia desleal en el año 2009, de una herramienta para que las empresas de menor tamaño que se vieran perjudicadas por una conducta de este tipo, pudiesen demandar el monto de los perjuicios que deriven del incumplimiento, de acuerdo a las normas generales.

La acción podía ser ejercida por el afectado personalmente, en forma colectiva o representado por la entidad gremial que les agrupe, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el ARTICULO NOVENO números dos al cinco de la ley que fija normas especiales para empresas de menor tamaño."

En ninguna instancia del largo trámite legislativo de la ley sobre pago a 30 días se discutió la eliminación del inciso segundo de la norma antes señalada, sino que el debate se centró exclusivamente en la modificación de lo señalado en el literal i) del artículo 4° de la ley N° 20.169, **y en particular que el incumplimiento de los plazos de pago del**

saldo insoluto contenido en la factura también fuera considerado como uno de los actos de competencia desleal.

Tanto es así que, la indicación que dio origen a la modificación de la letra i) hace referencia únicamente al inciso primero de la misma.

Es decir, desde su origen la materia en debate estuvo circunscrita sólo a la conducta de competencia desleal y no a la acción que, el inciso siguiente, le otorga a las empresas de menor tamaño perjudicadas por tal actuación desleal.

Sin perjuicio de lo anterior, las instancias administrativas de este Congreso Nacional, teniendo presente la historia de la ley en la que se incorporó el literal i) original, consideraron que al reemplazarse el mencionado literal i) del artículo 4° de la ley N° 20.169, también se estaba sustituyendo el inciso segundo referente a las acciones de las empresas de menor tamaño para demandar la indemnización de perjuicios, por lo que debía eliminarse, ya que tal inciso se consideró parte del mismo.

Sin embargo, lo anterior no concuerda en absoluto con el espíritu del debate que siempre estuvo centrado en proteger a las PYMES.

Por tanto, la eliminación de tan importante disposición no responde en caso alguno al espíritu de citada ley sobre pago a 30 días aprobada por ambas Cámaras del Congreso Nacional, por lo que es urgente corregir esta situación lo antes posible.

Para ello surgieron dos iniciativas, la primera: a través de una indicación formulada por el suscrito al proyecto de ley que modifica diversos textos legales para promover la inversión, el cual ha sido despachado de la Comisión de Economía, el día Sábado recién pasado, en Sesión convocada en forma previa a la Cuenta Pública y la segunda a través

de una moción parlamentaria presentada por la Senadora Ximena Rincón y respaldada por todos los miembros de la Comisión, Siendo esta la vía más expedita se optó por la moción parlamentaria.

Respecto del fondo del proyecto, la Comisión dejó expresa constancia en la historia fidedigna del establecimiento de la ley que el sentido del texto en este aspecto es que el afectado tiene a su favor tres vías o alternativas para ejercer la acción: de manera individual; en demanda colectiva, o, bien, representado por la asociación gremial. En tal sentido acordó, también por unanimidad, sustituir el término “personalmente” por los siguientes “por sí”, antecedido de una coma.

Luego de un breve debate, la Comisión aprobó el proyecto en general y particular por la unanimidad de sus integrantes (5x0).

Finalmente, también por la unanimidad de sus integrantes, la Comisión acordó proponer al Senado tratar este asunto en general y particular a la vez, conforme lo preceptúa el artículo 127 del Reglamento de la Corporación.

Valga la oportunidad, para hacer presente a esta Sala, la necesidad de que los sistemas de control de los textos de los proyectos de ley sean rigurosamente revisados y controlados por las Secretarías de Comisión que correspondan, por la Secretaría del Senado y por la Biblioteca del Congreso Nacional, de forma tal que, como producto de un trabajo coordinado entre dichas instancias, se generen los sistemas de revisión que permitan garantizar el más alto estándar de calidad en el trabajo legislativo y no nos veamos sorprendidos en el futuro por este tipo de situaciones.

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención,

César Quiroga Soria
Asesor Legislativo Externo

Señor
José Miguel Durana Semir
Senador Región XV
Presente.

Ref.: Estatuto laboral para jóvenes.

Estimado Senador:

Adjunto a la presente, proyecto de intervención para su discusión en Sala del proyecto de ley que crea una modalidad de estatuto laboral para jóvenes.

En este sentido, se sugiere pedir la votación por separado del artículo correspondiente a la edad máxima de los jóvenes para optar a esta modalidad de cumplimiento laboral.

PROYECTO DE INTERVENCION: ESTATUTO LABORAL PARA JOVENES.

Esta modalidad de cumplimiento de la jornada laboral, establecida para jóvenes trabajadores tiene su origen en el mensaje del Presidente Sebastián Piñera, de 13 de Junio de 2018 y da una respuesta adecuada a la necesidad de regular una modalidad de trabajo especial para nuestros jóvenes.

El proyecto original enviado por el gobierno del Presidente Piñera ha sido modificado durante su tramitación en la Comisión de Trabajo y el proyecto que hoy discutimos es fruto de un esfuerzo de consenso liderizado por el Ministro Monckeberg.

En estos acuerdos a los cuales hemos arribado, los 5 miembros de la Comisión y el propio Ministro del Trabajo y como producto de los mismos, se perdieron algunos elementos que enriquecían aún más el proyecto de ley que se intentaba aprobar.

Se abandonó la idea de crear un contrato especial de trabajo para jóvenes trabajadores, lo cual hubiese permitido contar con un real estatuto especial que atienda sus necesidades especiales y se optó por una modalidad de cumplimiento de la jornada laboral, sometida a normas especiales.

Aún así, podemos hoy contar con sustanciales avances para que nuestros jóvenes trabajadores puedan cumplir con su jornada académica y procurarse recursos para su manutención y en muchos casos la de su grupo familiar.

Dentro de estos avances logrados por el proyecto, podemos encontrar:

- a) Se refiere a estudiantes que estén cursando cursos regulares o que están en proceso de titulación en una institución de educación superior universitaria, profesional o técnica reconocida por el Estado o en entidades ejecutoras de programas de nivelación de estudios.
- b) El certificado de estudios forma parte del contrato de trabajo y debe ser otorgado por las instituciones superiores en forma gratuita y en un plazo breve: 3 días hábiles desde su solicitud.
- c) El estudiante debe informar a su empleador de cualquier cambio en su régimen académico.
- d) La jornada ordinaria de los estudiantes trabajadores debe ser continua, pudiendo pactarse una interrupción diaria acorde con el horario académico, distinta de su horario de colación. En todo caso, entre el inicio y el término de la jornada laboral no puede transcurrir más de doce horas.
- e) El máximo de horas diarias trabajadas en esta modalidad no puede ser superior a las 10 horas.
- f) Durante el receso de vacaciones académicas, los estudiantes pueden mantener el mismo régimen laboral, suspender su contrato de trabajo, pactar una jornada de trabajo ordinaria.
- g) En materia de salud, los estudiantes trabajadores pueden adquirir la calidad de cotizantes del régimen de prestaciones de salud, mantener su condición de beneficiario respecto de la institución de salud de la cual es carga, mantener su calidad de beneficiario con aporte del estudiante trabajador.
- h) Mantiene su calidad de carga familiar y su calidad de causantes de carga familiar.

- i) Las remuneraciones que perciba el estudiante trabajador no se considerarán renta a los efectos de determinar su situación socioeconómica, de forma tal de no perjudicar su acceso a sistemas de financiamiento de educación superior.

Dentro de las deficiencias del proyecto de ley que deben ser subsanadas en el futuro, se encuentran:

- El estudiante trabajador, a partir de los 24 años no puede continuar con esta modalidad de trabajo, no obstante continuar con sus estudios superiores y no obstante que de acuerdo a estudios estadísticos del MINEDUC, la edad promedio de titulación en nuestro país es de 28 años.
- Cumplida la edad máxima, el estudiante trabajador no puede continuar con esta modalidad de trabajo hasta la conclusión del año académico. Tal es así que un estudiante que cumpla 25 años en el mes de Marzo, no podrá continuar con esta modalidad laboral durante el resto del año académico.
- Si el trabajador estudiante deja de estudiar por un periodo breve de tiempo, debe volver a una jornada ordinaria de trabajo y no existe un plazo para renovar su calidad de estudiante.

Sugerencia:

Se sugiere votar favorablemente el proyecto de ley.

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención,

César Quiroga Soria
Asesor Legislativo Externo

Señor
José Miguel Durana Semir
Senador Región XV
Presente.

Ref.: Proyecto de Ley: causal de indignidad adultos mayores.

Estimado Senador:

Adjunto a la presente, proyecto de intervención para su discusión en Sala del proyecto de ley que establece una causal de indignidad para adultos mayores.

PROYECTO DE INTERVENCION: CAUSAL DE INDIGNIDAD ADULTOS MAYORES.

El proyecto de ley crea una causal de indignidad de herederos y legatarios para suceder aplicable a quienes sean condenados por delito de maltrato habitual, delito de abandono de personas desvalidas o delito de abuso patrimonial realizado en contra de personas mayores.

El problema de la violencia contra los mayores de edad es un tema que, lamentablemente, está muy presente en nuestra sociedad.

De acuerdo a las estadísticas emanadas de la Corte Suprema de Justicia, entre 2012 y 2016, un 41% de los casos corresponden a adultos mayores, siendo necesario que los Tribunales de Familia ordenen medidas de protección en 1.632 casos, debido a una grave vulneración de sus derechos., tales como prohibición de acercamiento a la víctima o la necesidad de implementar rondas de vigilancia por parte de Carabineros o la obligación del agresor de abandonar el domicilio.

Estas preocupantes estadísticas son más graves aún si consideramos que la mayoría de los casos, dada la vulnerabilidad de nuestros adultos mayores no llega ni siquiera a la denuncia.

En este contexto, el proyecto de ley es consecuente con la necesidad de complementar la decisión de política criminal con esta causal de indignidad.

No es posible que los agresores de nuestros adultos mayores permanezcan como sus herederos o legatarios.

Sugerencia: Es por ello que manifiesto mi conformidad con este proyecto de ley.

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención,

César Quiroga Soria
Asesor Legal Externo

Señor
José Miguel Durana Semir
Senador Región XV
Presente.

Ref.: Migración ciudadanos venezolanos.

Estimado Senador:

Adjunto a la presente, minuta en relación a los ciudadanos venezolanos que migran a Chile.

AYUDA MEMORIA LEGAL: PROBLEMÁTICA SITUACION DE VENEZOLANOS EN LA FRONTERA DE CHACALLUTA.

I. Antecedentes.

La visa de responsabilidad democrática, creada para auxiliar la apremiante situación en la que se encuentran los ciudadanos venezolanos, en general, hasta el 24 de Junio de 2019, sólo podía ser tramitada en los Consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz.

Situación a partir del 24 de Junio de 2019:

- Se amplió la cobertura para el otorgamiento de la Visa, la cual que hasta esta fecha sólo podía ser tramitada en los Consulados de Caracas o Puerto Ordaz, hoy puede ser otorgada en cualquier Consulado de Chile en el exterior. De esta forma quedaron habilitados los Consulados de Tacna y La Paz para el otorgamiento de las respectivas Visas.
- Asimismo, para la realización del trámite se encuentra habilitado el “Sistema de Atención Consular (SAC)”. Al cual se puede acceder desde cualquier parte del mundo, debiendo scanear el solicitante la documentación requerida.

- La visa de responsabilidad democrática **es una visa de residencia temporal con un año de duración y que puede ser prorrogada por otro periodo de un año.**
- De esta forma, **esta visa constituye un estatus especial que no alcanza a la calidad de refugiado.**
- La prórroga de un año adicional no significa la obtención de Visa de Residencia Definitiva.
- La Visa de Responsabilidad Democrática implica que los ciudadanos venezolanos que ingresan al territorio nacional cuentan con Rol Único Tributario, teniendo acceso a desarrollar las actividades que ese documento les permite.
- Hasta antes de la vigencia de las nuevas normas, los ciudadanos venezolanos necesitaban contar con un pasaporte que tuviera a momento de su ingreso una vigencia mínima de 18 meses. A contar del 24 de Junio, los trámites pueden ser realizados con pasaportes que hayan sido otorgados a partir de 2013, no obstante encontrarse vencidos.
- La Visa de Responsabilidad Democrática no puede sólo puede ser obtenida en los Consulados de Chile en el extranjero y necesariamente, en forma previa, al ingreso al territorio de Chile.

II. Algunas situaciones que deben ser aclaradas en relación a la Visa de Responsabilidad Democrática:

- No queda claro en las actuales disposiciones, si la Visa de Responsabilidad Democrática se puede convertir, en un futuro en una Visa de Residencia Definitiva. Es decir, si dada alguna situación, requisitos y tiempo, los ciudadanos venezolanos que tienen la Visa de

Responsabilidad Democrática pueden optar a la Visa de Residencia Definitiva.

- Tampoco se encuentra expresamente regulada la situación de los ciudadanos venezolanos a la conclusión de los dos años (primer año de vigencia y su prórroga por otro año) de su permanencia bajo la Visa de Responsabilidad Democrática.
- Para su obtención se exige la presentación de un certificado de Antecedentes penales emitido por el “Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores de Justicia y Paz” (MPPRIJP), debidamente apostillado o legalizado, con un máximo de 90 días al momento de ingresar la solicitud al Sistema de Atención Consular de Ciudadanos. Este certificado no puede ser obtenido por los ciudadanos venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela, toda vez que sólo se otorga en territorio venezolano.
- De la misma forma, los ciudadanos venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela, no pueden o les es ampliamente dificultoso el obtener la legalización o el apostillado de los mencionados certificados.
- El Certificado de Antecedentes penales exigidos por Chile, otorgado por el Ministerio del Poder Popular Venezolano, NO es un certificado confiable puesto que existen graves cuestionamientos a su fiabilidad. Por una parte, el Gobierno de Nicolás Maduro, al controlar el sistema judicial, se ha dado a la tarea de iniciar procesos, por todo tipo de causas en contra de opositores venezolanos y estos procesos se consignan en el mencionado certificado, lo que inviabiliza maliciosamente la permanencia legal de opositores en el extranjero.
- Por otra parte, personas con reales antecedentes penales, en Venezuela, a través del pago de coimas o sobornos u otros actos de corrupción obtienen la emisión de esos certificados sin registrar antecedente alguno. Es por ello que la información contenida en el informe debe ser verificada

a la luz de los antecedentes consignados por INTERPOL o bien ser reemplazado directamente por un certificado de INTERPOL, tal como lo estableció el Perú.

- Los pasaportes válidamente emitidos por el Estado Venezolano, con posterioridad a 2013, hoy son transados en el mercado negro. De acuerdo a lo señalado por el Servicio Jesuíta a los Migrantes de Chile estos pasaporte se llegan a transar sumas que alcanzan los \$us. 5.000 (cinco mil 00/100 dólares) y ello implica que se esté generando en Venezuela una situación irregular e ilícita con este tipo de documentos.
- Los ciudadanos venezolanos que hoy tratan de obtener sus Visa de Responsabilidad Democrática, deben cumplir otros requisitos que también tienen costos, difíciles de solventar, tales como fotografías o certificados de nacimiento, en el caso de los hijos menores de edad, legalizados o apostillados, siendo esto último, especialmente dificultoso de obtener para los ciudadanos venezolanos que tramitan esta visa fuera de Venezuela, además de los hechos irregulares y de corrupción a los que se ven sometidos.
- En el caso de ciudadanos venezolanos que tienen dependientes mayores de edad, la exigencia y problemática referida al certificado de antecedentes penales señalada, se replica.
- La exigencia del trámite de la apostilla, en Venezuela, es un trámite que hoy tiene un costo de \$us. 100.
- El costo del trámite de la Visa de Responsabilidad Democrática tiene un costo de \$us. 30.
- Los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar a Chile para hacer turismo por hasta 90 días, no necesitan visado. **Nada impide que una vez al interior del país, invoquen su calidad de refugiados.**

- **Los ciudadanos venezolanos que llegan a las fronteras sin cumplir estos requisitos podrían invocar su protección en calidad de refugiados.**

III. Naturaleza de refugiados y la vigencia de la Ley 20430.

- De conformidad al artículo 4º de la Ley 20430, en Chile rige el principio de la No Devolución de refugiados, señalándose: *“No procederá la expulsión o cualquier medida que tenga por efecto la devolución, incluyendo la prohibición de ingreso en frontera, de un solicitante de la condición de refugiado o refugiado al país donde su vida o libertad personal peligran.*

La protección en los términos enunciados precedentemente comprenderá, asimismo, cualquier forma de devolución hacia las fronteras de un país donde estuviere en peligro la seguridad de la persona o existieren razones fundadas para creer que podría ser sometida a tortura, a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

A los efectos de determinar si existen tales razones, se tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el territorio de una situación persistente de violación manifiesta, patente o masiva de los derechos humanos.

Aquellos solicitantes de la condición de refugiado que no hubieran obtenido el estatuto de tal, podrán solicitar un permiso de permanencia en el país, de conformidad con la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile.”

IV. Consecuencias de que los ciudadanos venezolanos que lleguen o traspasen las fronteras invoquen la calidad de refugiados:

- No Sanción por Ingreso Clandestino y Residencia Irregular.

- Respecto de los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiados que hayan ingresado o que residan irregularmente en el territorio nacional, no se aplicarán las restricciones de circulación establecidas por las normas generales sobre extranjeros, cuando aquellos se hayan visto forzados a recurrir a redes de tráfico ilícito de migrantes como forma de asegurar su ingreso al territorio y obtener protección.
- La totalidad de los trámites que deben desarrollar los refugiados son gratuitos, de conformidad a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 20.430.
- **El artículo 42 de la Ley 20430 regula el “Ingreso Masivo de Refugiados”**, señalando que se podrá implementar procedimientos especiales de determinación prima facie o por grupos, asegurándose la exclusión de quienes hayan cometido delitos de guerra, contra la paz o de lesa humanidad, delitos graves o actos contrarios a los principios de las Naciones Unidas.
- **Para esto, el país puede requerir el asesoramiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y garantizar las medidas necesarias para garantizar la efectiva protección de los refugiados.**
- **Estas medidas o procedimientos especiales deben ser adoptadas a través de reglamento.**

V. Problemáticas y sugerencias:

- La situación de los ciudadanos venezolanos que llegan a la frontera es de alta vulnerabilidad.
- El tratamiento dado a los ciudadanos venezolanos, bajo la perspectiva de una Visa de Responsabilidad Democrática, constituye una visión

individual, caso a caso, que conlleva la burocratización de su situación, debiendo ser tratados como una masiva llegada de refugiados.

- La problemática de la migración venezolana es un problema que afecta a todos los países de la región y por ello requiere coordinar acciones con los países vecinos y con organismos multilaterales como la OEA y PROSUR.
- La Visa de Responsabilidad Democrática enfrenta dificultades en su aplicación que implican, en algunos casos, la transgresión de derechos de ciudadanos venezolanos que llegan hasta la frontera.
- La solicitud de documentos que sólo pueden ser obtenidos en territorio venezolano inviabiliza, en muchos casos, la obtención de esta visa.
- Los documentos requeridos para la entrega de este tipo de Visa, tal como el certificado de antecedentes penales otorgado por organismos oficiales del gobierno de Nicolás Maduro, no son documentos confiables y por ende debe revisarse su exigibilidad o su reemplazo por certificados emitidos por INTERPOL.
- El ingreso masivo de ciudadanos venezolanos a Chile debiese ser regulado en el marco de lo establecido por el artículo 42 de la Ley 20430, de tal forma que se dicte un reglamento especial para regular su situación, en coordinándose acciones con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y el resto de los países de la región.
- El ingreso masivo de ciudadanos venezolanos a Chile se produce por la Región de Arica y Parinacota y deben proveerse a esta región de recursos adicionales y extraordinarios para enfrentar las externalidades que implica este ingreso y tránsito masivo de personas. Este asunto concierne al Estado de Chile y no exclusivamente a la Región de Arica y Parinacota.

VI. Nueva Ley de Migraciones:

- La nueva ley de migraciones que se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional, debe contener disposiciones expresas en relación al ingreso masivo de refugiados, de forma tal de regular en forma anticipada que este tipo de situaciones de repitan.
- En caso de contemplarse una Visa de Responsabilidad Democrática para situaciones especiales como la de los ciudadanos venezolanos, su regulación debe contemplar asignaciones presupuestarias especiales para las regiones receptoras y tránsito de los migrantes de forma tal de poder atender sus necesidades básicas.
- Esta nueva ley de migraciones debe otorgar un estatus especial a la Región de Arica y Parinacota como principal puerta de ingreso de migrantes y refugiados, determinándose la aplicación de presupuestos de emergencia para atender situaciones como las que actualmente se enfrentan y esto por constituir mayor gasto de recursos públicos, deber ser materia de indicación por parte del Poder Ejecutivo.

Sin otro particular, le saludo con la mayor atención,

César Quiroga Soria
Asesor Legal Externo